

Sección latinoamericana

CHILE

El largo camino en pos de la modernidad

(primera parte)

Durante el último cuarto de siglo Chile fue escenario de una dramática sucesión de proyectos históricos que entrañó hondas transformaciones económicas y políticas. El país austral vivió las experiencias divergentes de la "revolución en libertad" que preconizó el régimen de Eduardo Frei en la segunda mitad de los sesenta, la búsqueda truncada de la "vía chilena al socialis-

mo" durante el gobierno de Allende en los albores de los setenta, la larga etapa ulterior del autoritarismo militar en que se fraguó la "revuelta del mercado" y, finalmente, el advenimiento de la transición democrática que actualmente encabeza el presidente Patricio Aylwin.

Si el gobierno popular de Salvador Allende intentó encauzar las añejas aspiraciones de industrialización sustitutiva (renovadas por el de Frei) hacia un modelo de desarrollo socialista, las políticas impuestas durante el primer decenio del régimen castrense buscaron con fruición instaurar una economía dirigida por las fuerzas del mercado y con una amplia apertura al exterior. Las autoridades militares aplicaron severos programas para equilibrar las cuentas fiscales, frenar la inflación, liberar los mercados interno, financiero y laboral, privatizar las actividades económicas, intensificar el comercio exterior y atraer capitales foráneos. Durante algunos años la economía alcanzó un espectacular dinamismo, menguó la inflación, aumentaron con rapidez las exportaciones y casi desapareció el déficit fiscal, pero los saldos generales en el primer decenio de tales programas fue-

ron más bien sombríos. A pesar del llamado "milagro económico chileno" se redujo el PIB por habitante, declinó la inversión, empeoró el problema del empleo, ocurrieron cuantiosos déficits en la balanza de pagos y casi se quintuplicó el monto de la deuda externa.

Merced a la estrepitosa caída de la economía en el bienio 1982-1983, las autoridades militares consintieron en modificar en parte y en flexibilizar el enfoque de su política, aunque sin abandonar los principios básicos de la apertura al exterior, liberación de los mercados y preponderancia del sector privado. Así, se adoptó un control más estricto de la tasa de interés y se buscó mantener un tipo de cambio real elevado. De 1984 a 1990 Chile registró un crecimiento medio anual de 5.6% (el mayor de América Latina), conservó una relativa estabilidad monetario-financiera, logró ciertos avances en la modernización productiva, robusteció las actividades exportadoras y recibió una mayor afluencia de inversiones extranjeras directas. Sin duda la profunda restructuración impulsada por el gobierno militar contribuyó a la aparente bonanza del país, tras de la cual se ocul-

Las informaciones que se reproducen en esta sección son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publicaciones nacionales y extranjeras y no proceden originalmente del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., sino en los casos en que así se manifieste.

tan la creciente desnacionalización económica, la pertinaz concentración del ingreso y la pobreza de vastos grupos de la población.

En esta primera entrega se presenta un breve balance del empeño transformador del gobierno de Allende, se describe el vuelco radical del modelo económico con el advenimiento del régimen militar y se muestran los resultados iniciales del intento de modernización con base en el libre mercado. En la segunda se describirán los ajustes de la estrategia gubernamental tras el derrumbe del "milagro chileno" en los inicios de los ochenta, se examinará la recuperación económica lograda desde 1984, se hará un breve recuento de los acontecimientos sociopolíticos más sobresalientes y se señalarán los resultados del primer año de la nueva gestión civil.

Los años de la unidad popular

A principios de septiembre de 1970, en medio de una extraordinaria efervescencia política que trascendió las fronteras nacionales, Salvador Allende fue elegido presidente de Chile. Como candidato de la Unidad Popular (UP), coalición de partidos de centro-izquierda, Allende obtuvo cerca de 37% de los sufragios de unos reñidos comicios que abrieron paso al primer régimen socialista emanado de las urnas.¹ Además de importantes cambios institucionales, como el remplazo del Congreso Legislativo por una Asamblea del Pueblo, la UP propugnó grandes reformas en la economía, fincadas en la nacionalización de la banca, la minería, la agricultura, algunas empresas manufactureras, el comercio exterior y la distribución de productos básicos.²

Como punto de partida se consideró que los principales problemas nacionales eran el reparto inequitativo del ingreso, la vulnerabilidad externa de la economía, el gran poder de la oligarquía tradicional, la inflación y el desempleo. Desde esa perspectiva la estructura de la demanda inter-

na, la exacción foránea de los recursos nacionales y el bajo nivel general de acumulación de capital, representaban obstáculos formidables para lograr el dinamismo económico necesario para el cabal desarrollo del país. Las reformas propuestas, junto con el mejoramiento de la distribución del ingreso, representarían un paso importante hacia la construcción de una economía socialista y un vigoroso estímulo para un crecimiento rápido y sostenido. Tales empeños se perseguían sin quebrantar el orden legal vigente, pero con el ánimo de encontrar "un camino chileno hacia el socialismo".

El régimen de Allende heredó una economía casi estancada, acosada por la inflación y con un desempleo galopante. Merced a ello, el programa de la UP pretendió impulsar una rápida recuperación económica y una pronta mejoría en las condiciones de vida de los grupos mayoritarios. Los objetivos gubernamentales inmediatos fueron incrementar los salarios reales, fortalecer el consumo (en especial el de los grupos marginados), acelerar el crecimiento del PIB, abatir la inflación e iniciar las reformas económicas previstas. Las nacionalizaciones sectoriales se harían por medio de una nueva legislación que combinaba las confiscaciones y las compras de acciones. Las metas de control de la inflación y de crecimiento del producto, el consumo y los salarios se alcanzarían con base en una política de expansión de la demanda agregada (sobre todo mediante un aumento importante del gasto público), ciertas medidas redistributivas del ingreso y severos controles de los precios.

El programa de la UP se puso en marcha en noviembre de 1970. Con el triple propósito de elevar la producción agrícola, mejorar la precaria situación de los campesinos y socavar el poder oligárquico rural, se emprendió una reforma agraria más profunda que la del régimen de Frei. Junto con la expropiación de predios se alentaron las cooperativas, se buscaron nuevas vías para elevar la productividad y se revalorizó el papel de la agricultura. Al mismo tiempo se preparó un proyecto de enmienda constitucional para nacionalizar las grandes minas de cobre, fuente de 80% de los ingresos nacionales por exportaciones, hasta entonces propiedad conjunta de empresas transnacionales estadounidenses y del Estado chileno.³ A mediados de 1971 el

Congreso aprobó, por unanimidad, la reforma constitucional que puso por completo las grandes compañías cupríferas en manos estatales. La nacionalización de la banca comercial se llevó a efecto mediante compras accionarias financiadas por el Banco Central, mientras que la de las grandes empresas industriales se realizó por la vía de las requisas, las intervenciones y otros mecanismos.

Aunque con grandes dificultades, el gobierno de Allende avanzó con rapidez hacia el objetivo de establecer una economía mixta con una creciente preponderancia estatal en desmedro del sector privado.⁴ Durante los primeros dos años de la gestión prácticamente todos los fundos mayores de 80 hectáreas se expropiaron, el sistema financiero quedó bajo el dominio estatal, más de la mitad de la producción minero-industrial comenzó a provenir de empresas públicas y se afianzó el control del Estado sobre servicios básicos como el telefónico, el suministro de electricidad y la distribución de algunas mercancías.⁵ Como complemento de los cambios de propiedad, la política económica expansiva propició el mejoramiento de los salarios reales y originó un extraordinario aumento del gasto público. En 1971 el incremento promedio de los sueldos en el sector público fue mucho mayor que la tasa inflacionaria, lo cual se tomó como punto de referencia en las negociaciones salariales del sector privado. En ese mismo año el gasto público registró un crecimiento nominal de 80% que permitió financiar, por ejemplo, las mayores inversiones prometidas en vivienda, educación, salud y otros rubros sociales; casi un tercio del enorme déficit fiscal resultante se cubrió con créditos del Banco Central.⁶

El aliento de la demanda pronto se reflejó en el crecimiento de la producción interna. En 1971 el PIB de la economía chilena aumentó 7.7%, el consumo global se elevó 13.2%, los salarios medios reales su-

1. John Sheahan, *Modelos de desarrollo en América Latina. Pobreza, represión y estrategia económica*, Alianza Editorial Mexicana y Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, 1990, p. 274.

2. Mats Lundahl, "El camino a la dictadura: desarrollo político y económico en Chile, 1952-1973", en Rigoberto García (comp.), *Economía y política durante el gobierno militar en Chile, 1973-1987*, Fondo de Cultura Económica, México, 1989, p. 37.

3. Rudiger Dornbusch y Sebastian Edwards, "La macroeconomía del populismo en la Amé-

rica Latina", en *El Trimestre Económico*, vol. LVII (1), núm. 25, México, enero-marzo de 1990, p. 132.

4. Véase al respecto Carlos Holmes Trujillo, *Chile: triunfo y tragedia de la revolución socialista*, Ediciones Librería del Profesional, Bogotá, 1988, pp. 37-46.

5. Belarmino Elgueta y Alejandro Chelén, "Breve historia de medio siglo en Chile", en Pablo González Casanova (coord.), *América Latina, historia de medio siglo*, vol. 1: *América del Sur*, Siglo XXI Editores, México, 1977, p. 266.

6. Mats Lundahl, *op. cit.*, p. 41.

bieron 17%, la tasa de desempleo se redujo a menos de 4% y la participación de los trabajadores en el ingreso nacional se elevó a 61.7% (cerca de diez puntos). Estos logros iniciales fueron ensombrecidos, sin embargo, por varios signos preocupantes acerca de la viabilidad de la política económica más allá del corto plazo. El descenso de la inflación en 1971 (22%) fue muy leve en relación con años previos y la importancia de las medidas expansionistas aplicadas. Para los técnicos oficiales este logro antiinflacionario se debía al uso de la capacidad instalada ociosa (con un bajo efecto inflacionario). Los críticos, en cambio, consideraron que más bien era el reflejo de un fenómeno típico de "inflación reprimida" por el control de precios y para probarlo destacaron el extraordinario aumento de la oferta monetaria. Otros signos desfavorables fueron los rápidos incrementos del déficit fiscal y el crédito interno para el sector público, así como la reducción de los inventarios y de las reservas internacionales. A fines de 1971 se recrudecieron las presiones inflacionarias y, como corolario, surgió una creciente escasez de algunos bienes de consumo.⁷

Ocaso y fin del empeño transformador

Durante 1972 terminó el efímero auge de la economía chilena. Las presiones inflacionarias desbordaron los controles de precios, cuya alza general fue de 163%. A la par surgieron enormes cuellos de botella en numerosas ramas productivas, declinó la inversión privada, el déficit fiscal continuó en aumento, se acentuaron las dificultades del sector externo (más aún por la baja del precio internacional del cobre), la moneda se desvalorizó y, en suma, el PIB sufrió una caída de 1.2%. Ante el franco deterioro de la economía, el gobierno de Allende aplicó dos programas de estabilización, sin los costos sociales tradicionales, que buscaron enmendar el desorden cambiario mediante la devaluación diferencial del escudo, estimular la producción para cerrar la brecha oferta-demanda, contener el inflacionario déficit fiscal con el ajuste de los precios del sector público y reforzar el control estatal de la economía. Ambos intentos fracasaron. No obstante que se multiplicaron las sugerencias y las presiones en favor de un ajuste más ortodoxo, el régimen de Allende se apejó al compromiso

de cambio social y defensa de los intereses populares. Aunque no se logró evitar un cierto deterioro de los salarios reales, el gobierno de la UP estableció un programa de racionamiento y entrega de víveres para atenuar los problemas de escasez. Esta acción avivó los movimientos opositores, de tal suerte que en octubre de 1972 se organizó una huelga nacional contra "las políticas gubernamentales erróneas" con cuantiosas pérdidas materiales y altos costos políticos.

Lejos de disminuir, las dificultades de la economía chilena se recrudecieron durante el año siguiente. A la par con el estancamiento de las principales actividades productivas, se multiplicaron los problemas de escasez, las prácticas especulativas y el mercado negro, mientras que las intensas presiones inflacionarias desataron el alza de precios que alcanzó un ritmo superior a 1% diario. Los esfuerzos gubernamentales por compensar la caída abismal de la inversión privada fueron infructuosos, el déficit fiscal alcanzó un nivel extraordinario (alrededor de 23% del PIB) y el continuo saldo negativo de la balanza de pagos afectó aún más las exiguas reservas internacionales. La derrota de la UP en la "batalla por la producción", el desdiciamiento de los precios clave y las crecientes penurias financieras, socavaron tanto el control gubernamental de la economía como la viabilidad misma del empeño transformador.

La ausencia de políticas coherentes y eficaces no fue, desde luego, la razón única del fracaso de la gestión económica de Allende. También tuvo un papel prominente el tenaz hostigamiento de grupos opositores, empresas transnacionales, gobiernos extranjeros y otras fuerzas conservadoras.⁸ Tampoco fueron ajenas las discrepancias que afloraron entre las diversas agrupaciones integrantes de la UP. En el transcurso de 1973, sin embargo, la sociedad chilena se polarizó casi por completo en torno de los dos grandes proyectos históricos en pugna. Tras lograr un paulatino avance en el terreno electoral, hacia mediados del año la oposición conservadora exigió la renuncia del presidente Allende. Si bien intentó atemperar la crisis política por la vía negociadora, el mandatario socialista reafirmó los principios y las aspiraciones de su gobierno. Durante los meses siguientes, en medio del ahondamiento de los problemas económicos, el enjuto país andino fue escenario de una intensa actividad política

preñada de movimientos desestabilizadores, boicoteos empresariales, asonadas militares, reivindicaciones laborales y dramáticos esfuerzos en defensa del régimen constitucional. El sistema político en su conjunto había alcanzado el punto de ruptura.⁹ Finalmente el 11 de septiembre de 1973 un cruento golpe militar, encabezado por el general Augusto Pinochet, segó la vida del presidente Allende y entronizó el autoritarismo durante largo tiempo.

El camino hacia el libre mercado y sus vaivenes

El golpe militar provocó un vuelco radical en la vida política y en el rumbo económico de Chile. La década siguiente fue escenario de un ambicioso intento de modernización nacional con base en el libre mercado. En pos de ello se instrumentó un conjunto de políticas rigurosas encaminadas a la privatización de las actividades productivas, el abandono parcial de las funciones reguladoras del Estado, la apertura comercial externa, la atracción de capitales foráneos y la liberación de los precios internos, el sistema financiero y el mercado laboral.¹⁰ El autoritarismo castrense facilitó la restructuración económica deseada y, más aún, permitió que Chile fuera uno de los primeros terrenos experimentales de la ideología conservadora del mercado.¹¹ La dominación militar, en contraste, tornó más lentos los cambios político-institucionales que hasta 1980 dieron origen a una nueva Constitución.

Las primeras medidas económicas del régimen militar buscaron frenar las tendencias hiperinflacionarias, contener los graves desequilibrios macroeconómicos, combatir el desabasto y restaurar los mecanismos de mercado. Durante los últimos meses de 1973 y en 1974 se impuso un severo programa de estabilización tradicional que incluyó la liberación de los precios de casi todas las mercancías, la devaluación repetida de la moneda, el fuerte recorte del gasto público, el establecimiento del impues-

9. Mats Lundahl, *op. cit.*, p. 53.

10. Alejandro Foxley, *Experimentos neoliberales en América Latina*, Fondo de Cultura Económica, México, 1988, pp. 44-45.

11. Véase al respecto Armando Arancibia, "Chile: mitos y realidades del proyecto autoritario", en *Economía de América Latina*, núm. 7, Instituto de Estudios Económicos de América Latina-Centro de Investigación y Docencia Económicas, México, segundo semestre de 1981, pp. 169-195.

7. Rudiger Dornbusch y Sebastian Edwards, *op. cit.*, pp. 134-135.

8. *Ibid.*, pp. 140-141.

to al valor agregado (20%), la desgravación parcial de las ganancias de capital, la restricción del crecimiento de la oferta monetaria y el deterioro de los salarios reales para "inducir deliberadamente una contracción adicional de la demanda".¹² Junto con esas medidas para "eliminar las imperfecciones del mercado" se iniciaron los nuevos cambios estructurales de la economía chilena. Entre ellos figuraron la restitución de las empresas de las que los trabajadores o el gobierno se habían adueñado, la reprivatización de la banca, el desmantelamiento de barreras a las importaciones y la fijación de nuevas normas reguladoras de la inversión extranjera. Una de las secuelas inmediatas del proceso privatizador fue, sin duda, la formación de nuevos grupos de poder que influyeron poderosamente en el curso ulterior de la política oficial.¹³

Ese primer intento estabilizador tuvo magros resultados. Tras la caída de 5.6% que sufrió en 1973, la economía chilena registró apenas un modesto crecimiento de 1% en 1974. La inflación anual descendió de 606 a 369 por ciento, pero se mantuvo muy por arriba de las metas gubernamentales. El coeficiente del déficit fiscal frente al PIB disminuyó de 23.5 a 8.1 por ciento, aunque ello tampoco fue satisfactorio. Además continuó el elevado saldo desfavorable de la cuenta corriente, el nivel de desempleo casi se duplicó, persistió la atonía de la inversión privada y aumentó el monto de la deuda externa. Hacia abril de 1975 todavía no se vislumbraba algún signo importante de recuperación económica y, por el contrario, se acentuaron las tendencias depresivas, subsistieron las presiones inflacionarias y los bajos precios del cobre amenazaron con agudizar el déficit externo.¹⁴

Frente a ese sombrío panorama las autoridades militares resolvieron endurecer las políticas de ajuste, reprimir aún más la demanda y profundizar los cambios estructurales. Como primer paso se ordenó un recorte adicional de 15% en el personal y los gastos generales del sector público, con excepción de las fuerzas armadas. También se impuso una política monetaria más severa que en pocos meses redujo 44% la

cantidad de dinero circulante, mientras que el interés de los préstamos bancarios tuvo un alza vertiginosa y a mediados de los setenta "Chile podía presumir de tener las tasas tal vez más altas del mundo."¹⁵ En el renglón de los cambios estructurales se aceleró la privatización de empresas públicas, se brindaron más incentivos para el desarrollo de un mercado de capitales privado y se intensificó la desgravación arancelaria. Fue entonces cuando los economistas provenientes de la Universidad de Chicago, centro del pensamiento neoliberal, cobraron una enorme influencia en las políticas del régimen militar.

Los saldos iniciales del reajuste fueron casi desastrosos. En 1975 el PIB se redujo 12.9%, el producto por habitante retrocedió 14.4%, la actividad cayó 23.5% y subsistió el agobio de la hiperinflación (243%). Pese al inicio de los programas oficiales de ocupación temporal de mano de obra, la tasa de desempleo ascendió a 16.5% y los salarios reales bajaron a 60% del nivel de 1973. El descenso previsto de los costos productivos por la desvalorización del trabajo, puntal de la estrategia gubernamental, no se presentó: las tasas de interés aumentaron tanto que el efecto último del paquete restrictivo fue un fuerte aumento en los costos totales de producción. El comportamiento de las cuentas externas tampoco fue favorable. Aunque las importaciones se redujeron casi 45%, el derrumbe de las cotizaciones internacionales del cobre propició un nuevo incremento del déficit comercial y de la deuda externa.

Tanto por los raquíticos resultados como por las persistentes tendencias depresivo-inflacionarias, en junio de 1976 la estrategia oficial sufrió nuevos arreglos y se puso en marcha el Programa de Recuperación Económica.¹⁶ En él la contención de las presiones de costos, más que la simple contracción de la demanda, ocupó un lugar clave en la lucha antiinflacionaria. El peso fue revaluado, se adoptó un sistema de cotizaciones cambiarias a futuro, se puso coto al crecimiento de las tasas de interés y se rebajaron aún más los aranceles. Durante los meses siguientes la economía por fin dio muestras de recuperación, pero en 1977 ingresó en una etapa de relativo auge calificado en algunos medios como "el milagro chileno".¹⁷

La reactivación general del crecimiento económico fue acompañada por el virtual control del déficit fiscal, el descenso gradual de la inflación y el afianzamiento de los cambios estructurales emprendidos. Con la apertura comercial del país, por ejemplo, ningún arancel de importación fue mayor de 10% (salvo el de automóviles) y el manejo del tipo de cambio desplazó al control de la oferta monetaria como principal herramienta de estabilización. Cabe señalar que en esta fase de expansión, finalizada en 1981, se realizaron importantes reformas institucionales, como la descentralización regional de la administración pública, y entró en vigor una nueva legislación para trasladar las relaciones laborales al ámbito exclusivo de la empresa. Asimismo se privatizaron el sistema de previsión social, el suministro de varios servicios públicos y el control de puertos, caminos y telecomunicaciones, siempre con "la idea central de fomentar la competencia y la eficiencia, y hacer que las actividades resulten tan rentables como sea posible".¹⁸

De 1977 a 1981 la economía chilena creció a un ritmo anual de 8%, la inflación fue inferior a 40% en promedio, el déficit fiscal se convirtió desde 1979 en un pequeño excedente (algo inusitado en América Latina), las exportaciones se incrementaron con rapidez y el mercado de capitales tuvo un vigoroso desarrollo. La reactivación se fincó en gran medida en el repunte de la demanda interna. A ello contribuyó el descenso de la tasa de interés, cuyo nivel se redujo de 51% en 1977 a 12% en 1980. Las industrias manufacturera y de la construcción figuraron entre las más dinámicas, al igual que las actividades exportadoras (sobre todo en los sectores minero y agropecuario) beneficiadas por las devaluaciones de los años previos. En los círculos financieros internacionales se consideró como un ejemplo la "sana política económica" del régimen militar. Tal reputación, la abundancia del crédito y las grandes diferencias de las tasas de interés del mercado chileno con las del internacional fueron un poderoso estímulo para que muchos bancos foráneos otorgaran préstamos al país andino e incluso establecieran allí sucursales. El cuantioso flujo crediticio del exterior, además de reforzar la expansión del consumo, permitió el mantenimiento de un tipo de cambio fijo para aminorar las presiones inflacionarias.

Para algunos economistas el dinamismo

12. Alejandro Foxley, *op. cit.*, p. 50.

13. Alejandro Cox y Sebastian Edwards, *Monetarism and liberalization. The Chilean Experiment*, Ballinger Publishing Company, Cambridge, Massachusetts, 1987, p. 17.

14. Stefan de Vylder, "Chile 1973-1987: los vaivenes de un modelo", en Rigoberto García (comp.), *op. cit.*, p. 64.

15. *Ibid.*, p. 66.

16. Alejandro Foxley, *op. cit.*, pp. 55-56.

17. Alejandro Cox y Sebastian Edwards, *op. cit.*, pp. 18-19.

18. Stefan de Vylder, *op. cit.*, pp. 57-58.

económico de esos años era en cierto sentido artificial y representaba, en gran parte, una simple recuperación de los atroces resultados de años anteriores. La inversión permaneció en un nivel bajo y se concentró más en operaciones especulativas que en actividades productivas. Los nuevos capitales participantes en la industria manufacturera fueron exiguos, mientras que parte de la infraestructura física sufrió un fuerte deterioro tras el abandono del sector público. Las mayores inversiones se hicieron

en actividades vinculadas con el comercio y las finanzas, cuyo sectores de punta se modernizaron con la introducción de nuevos métodos y tecnologías. Aunque las exportaciones aumentaron en forma notoria, las importaciones crecieron con más rapidez y el déficit corriente se disparó de 531 millones de dólares en 1977 a 4 733 millones en 1981. Por otro lado, el auge económico alivió en poco o nada los enormes rezagos sociales acumulados. Después de un lustro de crecimiento todavía era enorme

la tasa de desempleo (17.2%), los salarios reales eran menores que a fines de los sesenta, los beneficios sociales se redujeron y la distribución del ingreso era más desigual. La gran mayoría de la población, en suma, se encontraba peor que diez años atrás.¹⁹ □

Rafael González Rubí

19. *Ibid.*, pp. 73-74.

recuento latinoamericano

Asuntos generales

Reunión extraordinaria del Grupo de Río

Con el propósito de analizar las posibles consecuencias de la guerra del Golfo Pérsico en las economías de América Latina y el Caribe y proponer un plan de contingencia regional en el campo energético, el 28 de enero se llevó a cabo en Caracas una reunión extraordinaria del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política (Grupo de Río). Asistieron los cancilleres de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Jamaica, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela; los secretarios ejecutivos de la CEPAL y la OLADE y el Secretario Permanente del SELA.

Al término del encuentro se emitió un comunicado en el cual se solicita a la CEPAL y al SELA su colaboración para evaluar las consecuencias del conflicto del Medio Oriente. En relación con el aspecto energético se señala la necesidad de atender los problemas del precio del petróleo sin perjuicio de los compromisos comerciales existentes no sólo en el sector petrolero, sino en las demás fuentes de energía. Asimismo, se acordó constituir un comité de evaluación permanente que siga el curso de los conflictos externos que incidan sobre la economía regional. □

Cooperación e integración

Préstamo del BID a la Corporación Andina de Fomento

El 25 de febrero el BID anunció el otorga-

miento de un préstamo de 80 millones de dólares a la Corporación Andina de Fomento (CAF) que se canalizarán a los cinco países de la subregión en forma de créditos "no atados" o de libre disponibilidad. Los recursos se destinarán a proyectos de inversión, producción y comercialización de bienes de capital, así como a operaciones de comercio exterior en el marco del Sistema Andino de Financiamiento del Comercio y del Mecanismo de Confirmación y Financiamiento de Cartas de Crédito para importaciones de terceros países. □

Productos básicos

Cayó 9.4% la producción de acero en 1990

La siderurgia latinoamericana produjo 38.4 millones de toneladas de acero en bruto en 1990, 9.4% menos con respecto al año anterior, informó el ILAFA el 12 de febrero. Las mayores bajas correspondieron a Perú (22%), Brasil (17.9%), Ecuador (13%), Uruguay (8.1%) y Argentina (7.6%). En cambio, aumentó la producción de Centroamérica (25.8%), México (10.6%) y Colombia (3%). Las exportaciones fueron de 14 millones de toneladas, 9.2% inferiores a las de 1989.

Cumbre de productores de banano

El 15 de febrero en la isla de San Andrés, Colombia, se reunieron los presidentes de Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá, así como representantes de los gobiernos de El Salvador y Ecuador, países productores de banano. En el encuen-

tro se suscribió la Declaración de San Andrés en la que se solicita a la CEE que "en la búsqueda de una solución al problema del régimen aplicable a las importaciones del plátano, otorgue una completa liberación del comercio de este producto, de acuerdo con las normas y disciplinas del GATT". Asimismo, se convino en integrar una comisión de alto nivel para que en las próximas reuniones en Nicaragua y Luxemburgo gestione ante la CEE el establecimiento de condiciones satisfactorias para el acceso del banano al mercado común europeo. □

Argentina

Aumento de salarios, combustibles y servicios públicos

El ministro de Economía, Domingo Cavallo, anunció el 3 de febrero un conjunto de medidas económicas. Se decidió otorgar un pago adicional de 250 000 australes (alrededor de 27.5 dólares) a los trabajadores activos y de 200 000 a los jubilados. Para disminuir el déficit fiscal se dispusieron aumentos de 33% al impuesto sobre combustibles y de 25% a las tarifas de los servicios públicos, las cuales se ajustarán periódicamente con base en el incremento de la paridad cambiarja. Se anunció, además, que continuará el sistema de libre flotación de la moneda, en los límites vigentes, que fluctúan entre 9 000 y 10 000 australes por dólar.

Se suspende la entrega de un tramo de crédito del FMI

Por el incumplimiento de las metas fijadas

sobre el déficit fiscal y la inflación en el último trimestre de 1990, Argentina perdió la posibilidad de recibir 300 millones de dólares, última de las seis partes de un crédito puente por 1 400 millones aprobado en septiembre de 1989 por el FMI. Anteriormente el país no recibió dos tramos del préstamo estipulado, pues tampoco se alcanzaron las metas económicas correspondientes. Lo anterior lo informó el Ministro de Economía el 12 de febrero.

Superávit comercial en 1990

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos informó el 26 de febrero que la balanza comercial argentina registró en 1990 un superávit de 7 899.2 millones de dólares, 48.5% mayor que el de 1989 (véase el "Recuento latinoamericano" de abril de 1990, p. 345). Las exportaciones ascendieron a 11 910.6 millones y las importaciones sumaron 4 011.4 millones. Los principales renglones de exportación fueron los combustibles, los minerales y los productos agropecuarios, mientras que se redujeron los de manufacturas y bienes de capital. □

Brasil

Ajustes drásticos al plan económico

El 31 de enero el Gobierno decretó un conjunto de medidas económicas, conocido como el plan "Collor II", destinado a frenar la espiral inflacionaria y profundizar el plan económico establecido por el presidente Collor de Mello al asumir su cargo (véase el "Recuento latinoamericano" de abril de 1990, p. 345). Se dispuso congelar los precios —al nivel del 30 de enero— y los salarios, ajustando éstos con el promedio inflacionario de los últimos meses. Se anunciaron, asimismo, incrementos de 46% en el precio de todos los combustibles, 58% en los servicios telefónicos, 59% en la energía eléctrica, 60% en el gas doméstico y 81% en las tarifas postales. Además, se decretó un feriado bancario por 24 horas y la suspensión definitiva de los intereses a plazo inmediato conocidos como *overnight* y de los bonos del tesoro nacional, considerados como factores de impulso a la inflación, debido a su reajuste diario y su uso referencial para la fijación de otros precios. El mismo día, el Instituto Brasileño de Geografía e Informática reveló

que el índice de precios al consumidor en diciembre y enero fue de 19.39 y 20.21 por ciento, respectivamente.

El 5 de febrero, la ministra de Economía, Zelia Cardoso de Mello, ordenó reducciones de un número indeterminado de precios congelados al reconocer errores en su fijación. Asimismo, se anunció la desgravación arancelaria gradual de 13 000 productos, excepto 47 de la rama de informática. Se pasará de una tasa promedio de 32.2 a 25.1 por ciento en 1991 y disminuirá a 14.2% en 1992. La lista de desgravaciones incluye desde bienes de capital hasta productos industriales, petroquímicos y agropecuarios. El mismo día el Gobierno decidió suspender las negociaciones para el refinanciamiento de la deuda externa hasta tener una evaluación objetiva del efecto de las medidas de ajuste económico. Se informó, también, que el Presidente solicitará al FMI una revisión de la carta de intención que suscribió con ese organismo en 1990.

Despide Autolatina a más de 5 000 trabajadores

Ante la necesidad de reducir drásticamente la producción de automóviles en virtud de la caída de la demanda, el 19 de febrero la empresa Autolatina, formada por las filiales de la Ford y la Volkswagen, anunció el despido de 5 110 trabajadores. Aquella produjo 914 576 vehículos en 1990. □

Colombia

Adiós a las armas

Después de 23 años de lucha armada, el grupo guerrillero Ejército Popular de Liberación (EPL) suscribió el 15 de febrero un acuerdo de paz con el gobierno de César Gaviria y se comprometió a entregar las armas el 1 de marzo e incorporar a sus casi 2 000 efectivos a la vida civil y política. Según el tratado, el EPL se convertirá en un partido político y contará con dos representantes en la Asamblea Nacional Constituyente. Con el Movimiento 19 de Abril y el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el EPL se convierte en el tercer grupo guerrillero que se acoge al proceso de paz iniciado hace ocho años por el Gobierno colombiano.

Acciones de empresas estatales en venta

Con el propósito de reorientar los recursos de inversión a sectores como el pesquero y el maderero, el 27 de febrero el Instituto de Fomento Industrial —propiedad del Estado— anunció la venta de sus acciones en 26 empresas, de la que se espera obtener ingresos de 25.5 a 30.6 millones de dólares. Entre aquéllas, cuyas ganancias en 1990 fueron de 110 millones de dólares, destaca la Corporación Andina de Fomento, en la que el Instituto tiene 11.2% del total de acciones y que de acuerdo con los estatutos de la Corporación sólo podrán venderse al Banco Central de Colombia. Las demás acciones se ofrecerán en subasta y a bancos privados y casas de bolsa. □

Costa Rica

Se establece medida proteccionista

Para hacer frente al déficit comercial de aproximadamente 600 millones de dólares, el Banco Central de Costa Rica estableció una sobretasa de 10% a las importaciones. La medida, de carácter temporal, se aplicará a las mercancías provenientes de todos los países, incluso los centroamericanos con los que Costa Rica mantiene acuerdos para la liberación del intercambio comercial recíproco. Lo anterior se informó el 1 de febrero.

Acuerdo tributario con Estados Unidos

Costa Rica y Estados Unidos suscribieron el 19 de febrero un tratado de intercambio de información tributaria para vigilar el proceso de recaudación fiscal de sus contribuyentes. Se acordó, además, que el país centroamericano podrá recibir —mediante inversiones— parte de los recursos del llamado Programa 936, cuyos fondos (unos 8 000 millones de dólares) proceden de las utilidades de las empresas estadounidenses establecidas en Puerto Rico y que pueden reinvertirse, exentas de impuestos, en algunos países latinoamericanos.

Nueva devaluación del colón

El 28 de febrero el Banco Central de Costa Rica ordenó una nueva devaluación de la moneda de 5.8% respecto de la paridad vi-

gente a fines de enero. La cotización del dólar se estableció en 110.45 colones a la compra y 112.55 a la venta. □

Cuba

Convenio azucarero con Irán

El 28 de enero se informó que los ministros del Azúcar de Cuba y de Agricultura de Irán firmaron un acuerdo de cooperación en materia de agroindustria azucarera. Incluye aspectos tales como el establecimiento, en asociación con otros países productores, de centrales azucareras, industrias derivadas y centros de investigación agrícola e industrial. Cuba proporcionará asistencia técnica en materia de producción, mejoramiento genético, programación agrícola e industrial y tecnología azucarera.

Cambia su representación diplomática en Estados Unidos

A partir del 1 de abril Suiza se hará cargo de los intereses diplomáticos de Cuba en Estados Unidos, en virtud de que Checoslovaquia dejará de prestar este servicio al Gobierno de La Habana. La información se dio a conocer el 9 de febrero.

Datos sobre la exportación azucarera

El 21 de febrero la empresa Cubazúcar de Comercio Exterior informó que hasta septiembre de 1990 exportó alrededor de 6.6 millones de toneladas del dulce, mientras que la producción de la última zafra fue superior a 8 millones de toneladas. Entre los compradores destacan China, con 800 000 ton; Egipto, 314 874; México, 273 921; Canadá, 235 000, y Brasil, 163 046. □

Chile

Se reincorpora al SGP de Estados Unidos

El 4 de febrero el Gobierno estadounidense autorizó la reincorporación de Chile al SGP, que otorga rebajas arancelarias a los productos provenientes de las naciones en desarrollo. El país andino había quedado fuera por su negativa de reconocer los de-

rechos laborales de los trabajadores, según lo estipulan los estatutos del SGP.

Datos económicos

Según cifras dadas a conocer por el Banco Central el 9 de febrero, en 1990 la balanza de pagos registró un saldo positivo de 1 316.4 millones de dólares y las reservas internacionales ascendieron a 5 500 millones, equivalentes a una tercera parte de la deuda externa del país. También se informó que en enero la inflación creció 0.4%, en tanto que el ahorro financiero y el circulante aumentaron 3.0 y 3.1 por ciento, respectivamente. □

Ecuador

Gira de Rodrigo Borja por Europa

El 26 de febrero el presidente ecuatoriano Rodrigo Borja informó los resultados de su gira por Francia, Suiza y Bélgica. En este último país se entrevistó con Jacques Delors, presidente del órgano ejecutivo de la CEE, con el propósito de aumentar la cooperación entre ese bloque comercial y el país andino. Borja informó que los tres países otorgaron créditos y donaciones a Ecuador por un total de 137.5 millones de dólares para la ejecución de programas de desarrollo social. □

Guatemala

Represalia comercial contra Costa Rica

En respuesta a la medida adoptada por Costa Rica de establecer una sobretasa de 10% a todas sus importaciones, incluyendo las centroamericanas, el 12 de febrero el Gobierno guatemalteco anunció la aplicación de un gravamen de 15% para los productos procedentes de aquel país. □

Haití

Jean Bertrand Aristide asume el poder

El 7 de febrero el sacerdote Jean Bertrand Aristide juró como presidente de Haití. En

su primer discurso, el nuevo mandatario pidió al pueblo un voto de confianza para las fuerzas armadas y "sugirió" a la comandancia militar el pase a retiro de seis de los ocho generales que integran el alto mando del ejército. Prometió guiarse por la Constitución para gobernar el país y luchar contra la corrupción, el duvalierismo y el tráfico de drogas. Al reafirmar su posición en favor de la teología de la liberación, señaló que "la democracia es una transformación social digna y respetuosa". Asimismo, se pronunció en contra del sueldo de 10 000 dólares que la ley asigna al Presidente de la República, pues esa cantidad es "un escándalo y una ofensa para el pueblo pobre".

Un día después Aristide prohibió salir del país a 134 funcionarios hasta que se realice una auditoría sobre su manejo de los fondos públicos y ordenó una exhaustiva investigación del intento golpista del 7 de enero, comandada por antiguos dirigentes duvalieristas. □

Honduras

Crédito concesionario para programas de ajuste estructural

La Asociación Internacional de Fomento (AIF), dependiente del Banco Mundial, anunció el 31 de enero que otorgó a Honduras un crédito concesionario de 20 millones de dólares, para apoyar un programa de ajuste estructural de la economía. Los recursos complementan un financiamiento por 90 millones otorgado en septiembre de 1990 por la misma institución para incrementar las exportaciones y el ahorro interno. □

Nicaragua

Medidas monetarias

Con el propósito de evitar perturbaciones en la circulación de la nueva moneda, el córdoba oro, cuya paridad es de uno por dólar estadounidense, el Banco Central de Nicaragua estableció el 28 de enero una severa restricción a la venta de divisas. Seis días después el mismo instituto anunció una devaluación de 6.8% de la moneda antigua, por lo que la cotización oficial del dólar pasó de 4.1 a 4.4 millones de unidades.

Disposiciones para estimular las exportaciones

El 29 de enero la presidenta Violeta Barrios emitió un decreto mediante el que autoriza a las empresas privadas a exportar directamente sus mercancías, derecho que desde 1981 era exclusivo del Gobierno. El Ministerio de Economía expedirá las licencias de exportación a los interesados. Asimismo, dispuso que las ventas externas de diversos productos como café, algodón, azúcar, ajonjolí y carne de vacuno, entre otros, queden exentas de impuestos.

Ayuda financiera estadounidense

El 4 de febrero el ministro de la Presidencia, Antonio Lacayo, informó que el Gobierno de Estados Unidos aportará aproximadamente 202 millones de dólares como ayuda para la recuperación económica de Nicaragua. El día 26 se recibió la primera entrega, por 24 millones de dólares, destinados a reforzar las reservas internacionales y financiar las importaciones urgentes. □

Panamá

Bajó el precio de los combustibles

El 6 de febrero el Gobierno anunció la disminución en 24 y 11 centavos de dólar del precio del galón de las gasolinas y del diesel liviano, respectivamente. Las nuevas cotizaciones son: 2.13 dólares para la gasolina de consumo general, 2.20 la mejorada, 1.74 la empleada para el transporte público, 1.25 el diesel liviano y 1.33 el mejorado. Los precios estarán vigentes en tanto se mantenga el costo promedio del crudo importado (21 dólares por barril). □

Paraguay

Levanta Estados Unidos las sanciones arancelarias

El 5 de febrero el presidente Andrés Rodríguez anunció que Estados Unidos decidió reincorporar a las exportaciones paraguayas a los beneficios del SGP, del cual quedaron fuera en 1987. En 1990 las ventas del país sudamericano en el mercado estadounidense sumaron poco más de 40 millones de dólares y las importaciones casi 100 millones. □

Perú

La inflación creció 17.8% en enero

El Instituto Nacional de Estadística informó el 1 de febrero que en enero la inflación fue de 17.8%, casi seis puntos porcentuales menos que el mes anterior; el índice acumulado en los últimos 12 meses es de 6 932.5 por ciento.

El cólera recorre los Andes

Después de casi un siglo, el 3 de febrero revivió en Perú el virus *vibrión cholerae*. La epidemia del cólera se inició en el puerto de Chimbote, 400 km al norte de Lima, y se extendió rápidamente a lo largo del litoral y en diversas zonas de la sierra centro y norte del país. El gobierno de Alberto Fujimori decretó el estado de urgencia nacional por 120 días y prohibió el transporte de alimentos entre las poblaciones afectadas, al tiempo que los países vecinos establecieron drásticas medidas sanitarias en sus fronteras y restringieron severamente el ingreso de alimentos crudos y lácteos.

En el transcurso del mes varios países e instituciones internacionales, entre ellos Cuba y la UNICEF, enviaron ayuda, equipo médico y asistencia técnica para controlar la epidemia.

El 17 de febrero, las autoridades informaron que las restricciones impuestas por los países compradores de productos peruanos de origen marino han ocasionado severas pérdidas económicas. Cinco días después el Ministerio de Salud anunció un conjunto de medidas de urgencia, entre las que destacan: el aumento de los niveles de cloro en el suministro de agua potable, la desinfección de los desagües de los hospitales y la colocación de sanitarios públicos en las calles de la capital. Hasta el 1 de marzo el cólera había causado 190 decesos y se habían detectado más de 45 000 enfermos.

Fujimori reestructura su gabinete

El 14 de febrero se informó que el nuevo primer ministro y a la vez titular del Ministerio de Relaciones Exteriores es Carlos Torres y Torres Lara, y que el responsable de la cartera de Economía es Carlos Boloña. Los ministerios de Trabajo y Promoción Social y de la Industria, Turismo e Integración los ejercerán, respectivamente, Alfonso de las Heras Pérez y Víctor Joywa. La reestruc-

turación del gabinete se llevó a cabo ante la renuncia colectiva de los ministros por desacuerdos con la política económica del presidente Alberto Fujimori.

Continúa la política de ajuste económico

El 26 de febrero el nuevo ministro de Economía y Finanzas, Carlos Boloña, anunció aumentos salariales de hasta 36% para los empleados estatales; la ampliación de la política de renuncias voluntarias a los profesionales del sector público, y reajustes al programa económico puesto en marcha en agosto de 1990. Con relación a la "compra de renuncias" informó que en la primera etapa se sumaron 30 000 personas; en esta segunda fase se tiene como meta lograr 25 000 renuncias voluntarias. Finalmente, declaró que las reformas estructurales requieren de otra dinámica, especialmente la reducción del tamaño del Estado —vía la "compra de renuncias" y la venta de empresas públicas—, la reforma tributaria y la reducción arancelaria. □

Uruguay

Reestructuración de parte de la deuda externa

Después de varios meses de negociación, el 31 de enero el Gobierno firmó con 71 bancos acreedores un contrato de reestructuración de deuda externa por 1 615 millones de dólares (la total asciende a 7 000 millones de dólares). Las modalidades de negociación fueron las siguientes:

- Uruguay recomprará 633 millones de dólares (40% del monto de la deuda negociada) a 56% de su valor nominal, 3.6% por encima de su valor vigente en el mercado. La operación se financiará con préstamos del FMI, el BID, el Banco Mundial y con recursos propios. Esta propuesta fue aceptada por 33% de los bancos acreedores.

- Canje de 33% de la deuda por títulos nuevos, emitidos por el Tesoro estadounidense, por un valor de 535 millones de dólares, a un interés menor de 6.75% y con vencimiento a 30 años. Lo anterior, acordado por 41% de los acreedores, permitirá al país reducir en 40 millones el pago anual de intereses por el servicio de la deuda.

- Refinanciamiento de 447 millones de dólares (27% de la deuda restante) a 16

Uruguay: el comercio con los vecinos

En su comercio exterior, Uruguay tiene en Brasil el más importante comprador; las cifras primarias de 1990 muestran que alrededor de 30% de las exportaciones se canalizan hacia ese país. Pese a las perspectivas de mediados de año, en que la mayor parte del sector se mostraba pesimista, las ventas totales uruguayas se acercaron a los 1 600 millones de dólares, 9.5% más que en 1989. De ese volumen, alrededor de 37% correspondió a las exportaciones tradicionales y algo así como 63% a las no tradicionales, que crecieron 10.7% de un año a otro.

La CEE es el segundo comprador en orden de importancia: hacia allí va 25% de las exportaciones uruguayas (Alemania encabeza las compras de la CEE, con 7.8%), mientras que la URSS sólo figura con un modesto 5%. Menores fueron todavía las ventas a la República Popular China: apenas 3.9%; Israel —al que se provee de carnes— aparece en la información del Banco de la República con sólo 1.4 por ciento.

En definitiva, son las exportaciones

hacia otros países americanos las que representan un monto mayoritario: casi 51% (Brasil incluido); les siguen Europa con 33.5% y el resto del mundo con 15.5%. En relación con las exportaciones hacia los países vecinos —habida cuenta de la trascendencia del mercado común del cono sur y del efecto que puede significar para algunos rubros de la producción uruguaya—, Argentina aparece con un magro 4.3 por ciento.

Uruguay firmó en esta década dos importantes acuerdos comerciales: el Convenio Argentino-Uruguayo de Cooperación Económica (CAUCE) y el Protocolo de Expansión Comercial Brasil-Uruguay (PEC). Ambos establecieron el otorgamiento de facilidades relativas o rebajas impositivas recíprocas. En el acuerdo con Argentina, ésta liberó 3 500 productos uruguayos y Uruguay 3 000 productos argentinos. Más reducida es la lista con Brasil: 1 900 fueron los productos uruguayos que pueden ingresar según el PEC y 1 400 los brasileños.

De todos esos miles de productos y artículos exportables, Uruguay sólo co-

mercializa entre 300 y 400 con Argentina y un máximo de 395 con Brasil. Hasta noviembre del año pasado se había exportado a Argentina por valor de 64 millones de dólares (casi 55.5 millones dentro del CAUCE y sólo 8.1 millones fuera del convenio) y se importó por 190 millones de dólares (por el CAUCE, 74 millones) Con Brasil —y en el mismo período— se exportó por 442.9 millones de dólares (de ellos, 331.6 millones dentro del PEC) y se importó por 302 millones (119.9 millones por el PEC).

La diferencia entre los rubros negociados y los realmente comercializados (apenas alrededor de 10% con Argentina, hasta 20% con Brasil) puede tomarse como un indicador para medir la competitividad de aquellos productos que ni siquiera logran beneficiarse hoy de las ventajas que presenta el mercado uruguayo para sus vecinos. □

Tomado del semanario *Brecha*, año VI, núm. 271, Montevideo, 8 de febrero de 1991.

años, con 7 de gracia. Además se logró obtener fondos frescos por 90 millones de dólares a 15 años, con 7 de gracia.

El Banco Central de Uruguay informó 15 días después sobre la venta de 1 500 000 onzas de oro de sus reservas, a un precio promedio de 389.12 dólares por onza. El monto obtenido con la operación, de poco más de 58 millones de dólares, se destinará a financiar una parte de la recompra de la deuda externa.

Inflación de 7.23% en enero

La Dirección General de Estadística y Censos informó el 6 de febrero que el índice de precios al consumidor aumentó 7.23% en enero; la inflación anualizada se ubicó en 133.7 por ciento. □

Venezuela

Asume el Gobierno la deuda externa de una empresa siderúrgica

El 12 de febrero se informó que el Gobierno venezolano asumió la deuda externa de la gran empresa Siderúrgica del Orinoco (Sidor), que asciende a 1 560 millones de dólares. Ubicada en la región suroeste de Venezuela, Sidor tiene 18 000 empleados y 16 plantas de producción. En 1990 produjo 2.4 millones de toneladas de acero, de las cuales exportó un millón.

Se redujo 3% el presupuesto para 1991

El 13 de febrero las autoridades aprobaron un nuevo presupuesto para 1991 cuyo

monto total es de 713 000 millones de bolívares (14 200 millones de dólares), 3% menor que el previsto originalmente. La reducción obedece a que el Gobierno venezolano se enfrenta a un déficit presupuestario de entre 1 000 y 2 000 millones de dólares y una caída en los precios del petróleo de alrededor de tres dólares por barril. Se calcula que 85% del presupuesto deberá cubrirse con las ventas del hidrocarburo.

La población asciende a más de 18 millones de habitantes

La Oficina de Estadística e Informática informó el 25 de febrero que de acuerdo con los primeros resultados del último censo realizado en noviembre de 1990, en Venezuela habitan 18 105 265 personas, 24.7% más que en 1981. De este número, 50.3% son mujeres y 49.7%, hombres. □